

Que como última y definitiva contestación á las objeciones que pudieran todavía formularse, respecto de los inconvenientes de la interpretación que se dá al texto de la Constitución, queda el razonamiento de que en las instituciones humanas se acaba siempre por llegar á un punto del que ya no se puede pasar, por mas imperfecciones que presenten.

En virtud de estas consideraciones y fundamentos, se decreta: que se reforma la sentencia del Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan, pronunciada en 19 de Agosto del corriente año, declarándose improcedente el recurso de amparo promovido contra el C. Magistrado 2º suplente del Tribunal de Circuito de Mérida, por violación del art. 8º de la Constitución federal.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 17 de Noviembre de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora, por varios empleados de la Aduana Marítima del Puerto de Guaymas, contra el C. Gobernador del Estado, por el cobro de una contribucion extraordinaria.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El fiscal cree fundado el presente ocurso en que solicitan amparo y protección los empleados de la Aduana Marítima: Administrador, C. Francisco Sepúlveda; Contador, C. Félix Schiafino; Oficial 1º, C. Francisco Schober, y Vista, C. Manuel Mª Alegre, por la contribucion suplementaria que les exige el C. Administrador de Rentas de esta ciudad, en virtud de la ley de 22 de Junio último, y reglamentada por el Gobierno del Estado, dos dias despues.

Poco ó nada dirá en cuanto al Sr. Schober, porque á éste, no conociéndole otros bienes que su destino y no llegando el sueldo que disfruta á la cantidad que determina el art. 1º de la referida ley, no hay duda que está exento de ser contribuyente. En cuanto á los demas empleados, que son sus sueldos de mas de dos mil pesos, estos no han sido acotados por el empleado que designa la misma ley.

El reglamento dice terminantemente: que la designacion de los capitales para señalar la cuota respectiva, se hará por el Administrador de Rentas del lugar en que reside el contribuyente, no dando tal facultad, en su concepto, á la Junta revisora que señala el art. 5º de dicho reglamento; la que segun el art. 6º, no tiene esta mas atribuciones que recibir las quejas de los agraviados, para que si las considera justas, quitarlos de las listas ó disminuirles sus cuotas, y este déficit aumentarlo, no con nuevos contribuyentes, sino con los que están listados por el C. Administrador, con el objeto de que el cupo de

cada Distrito quede siempre cubierto, y por no haberse dado el debido cumplimiento, acenotando la Junta á los referidos empleados, la que no tiene derecho á hacerlo conforme á ese mismo reglamento. No hay duda que con ese procedimiento se les ha violado á los quejosos la garantía que les otorga la Constitución federal en su art. 16, y por estar su solicitud fundada en la frac. I del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, es de accederse á lo que se solicita.

Guaymas, Julio 28 de 1874.—*José Monteverde.*

Es copia que certifico. Guaymas, Agosto 8 de 1874.—*José Monteverde.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guaymas, Agosto 6 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante este Juzgado, por los empleados de la Aduana Máxima de este Puerto, CC. Francisco Sepúlveda, Administrador; Félix Schiafino, Contador; Francisco Schober, Oficial 1º y Manuel Mº Alegre, Visto; contra el Administrador de Rentas, por la contribucion que les impuso la Junta creada por el art. 5º del Reglamento que formó el C. Gobernador del Estado, para el cobro de la contribucion extraordinaria de \$ 15,000, que por una sola vez impuso el decreto núm. 40 de 22 de Junio próximo pasado. Visto el informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado; el parecer del Promotor fiscal de este Juzgado; los últimos alegatos del C. Administrador, por sí y en representación de los demas empleados; la citacion para sentencia y cuanto mas consta de autos y tener presente convino, y

Considerando: Que el Ejecutivo del Estado al formar el Reglamento, para el que lo facultaba el art. 20 del decreto ya citado, dijo en su art. 1º que la designacion de los capitales, así como el señalamiento de las cuotas que proporcionalmente correspondan á cada uno, se ha de hacer por los Administradores de Rentas.

Que para presentar las quejas los que se crean agraviados por estas, estableció el mismo Reglamento, en su art. 5º, una Junta, compuesta del Prefecto, el Presidente municipal y un vecino del lugar, de notoria honradéz y probidad.

Que por el art. 6º se dió á estas Juntas el carácter de revisoras, pues el Gobierno solo las facultó para recibir las quejas de los agraviados y disminuirles su cuota, si lo cree conveniente, aumentándola á otro de los contribuyentes menos gravados.

Que ni por el sentido, ni de las palabras de ninguna de los artículos del Reglamento, puede decirse que la mente del Ejecutivo fuese facultar á estas Juntas para que designaran capitales ni señalaran cuotas, confiándolos el art. 1º exclusivamente á los Administradores de Rentas.

Que de no ser esta la inteligencia que se dió á la disposicion del Ejecutivo, resultaría el grave inconveniente de que los acenotados por las Juntas, no tendrían los derechos que á todo el que lo es por los Administradores, concede el art. 5º del Reglamento; ni los que este concede en su art. 8º á los tres miembros de la Junta; ni el derecho que á los mismos Administradores, al ser acenotados á su vez, concede el mismo artículo, de donde resultaría que á todos los contribuyentes se concedían medios de defensa y recursos para reparar, tal vez, una injusticia que con ellos se hubiese cometido, menos á los acenotados por la Junta, lo cual no puede suponerse que fuera nunca la mente del C. Gobernador, y sí se infiere, por el contrario, que el sentido del Reglamento fué no facultar de ninguna manera á las Juntas para que se abrogaran las facultades que el art. 1º solo concede á los Administradores de Rentas.

Que no puede darse importancia alguna á la razon alegada por el ejecutor del acto reclamado, cuando dice: "que al hacer la acenotacion no fueron gravados los empleados quejosos, porque desempeñaban sus destinos interinamente y sin los despachos res-

pectivos, y quizá algunos de ellos sin el goce del sueldo de dos mil pesos arriba que marca la ley para ser gravado el empleado, pues aun cuando despues de pasadas las listas á la Junta revisora ya tuvieran sus despachos, esto no podria calcularlo el Administrador, para gravarlos antes que los hubieran recibido, pues equivaldria á dar á la disposicion del Gobierno del Estado un efecto retroactivo.

Que la segunda razon alegada por el Administrador de Rentas, tampoco puede tomarse en consideracion, pues si por olvido dejó de anotar á alguno que la ley llamaba á ser contribuyente, el art. 10 del mismo Reglamento dice la pena que tiene el Administrador ó miembro de la Junta que tuvo algun olvido ó omission, que es una multa de diez á cien pesos, y por cuya causa no puede nunca entenderse investida la Junta revisora de facultades que la ley no le concedió.

Que la última razon en que se apoya el ejecutor del acto reclamado, que es la de que él pudo no tener conocimiento del capital de alguno que debió ser contribuyente, tampoco es de fundamento alguno, porque cuando el Ejecutivo del Estado dijo: "La designacion de capitales y el señalamiento de las cuotas, la harán los Administradores de Rentas," es porque creyó á estos con los conocimientos bastantes para hacer tales calificaciones, y con sobrado fundamento, pues nadie mejor que estos empleados debe estar al tanto de las circunstancias de cada ciudadano; y considerando, por último, que la anotacion puesta al Sr. Schober es *ipso jure* nula, por ser constante que su sueldo no llega á dos mil pesos, que es minimum que marca el decreto núm. 40 del Estado, para ser contribuyente.

Este Juzgado, por las razones y fundamentos expuestos, y apoyado en los arts. 14 y 16 de la Constitucion y el 1º frac. I. de la ley de 20 de Enero de 1869, falla:

1º: La Justicia de la Nacion ampara y protege á los CC. Francisco Sepúlveda, Fé-

lix Schiafino, Francisco Schober y Manuel M<sup>a</sup> Alegre, contra el cobro que les hace el C. Administrador de Rentas de este Puerto, de \$ 60 al primero; 35 al segundo; 18 al tercero y 40 al cuarto, por contribucion extraordinaria decretada por el II. Congreso de este Estado é indebidamente aplicada por la Junta revisora, por violar con tal cobro, en la persona de los quejosos, la garantía que les concede el art. 16 de la Constitucion general.

2º: Notifíquese y publíquese en el periódico del Estado y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia, para su revision.

Fernando M<sup>a</sup> Astiazarán, Juez de Distrito de Sonora, definitivamente juzgando, así lo decretó, firmando con los de su asistencia ordinaria.—*Fernando M. Astiazarán.*—Asistencia, *P. del Rincon.*—Asistencia, *P. A. Piña.*

Es copia que certifico. Guaymas, Agosto 8 de 1874.—*Fernando M. Astiazarán.*—Asistencia, *P. del Rincon.*—Asistencia, *P. A. Piña.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre 31 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora, por los empleados de la Aduana Marítima del Puerto de Guaymas, CC. Francisco Sepúlveda, Félix Schiafino, Francisco Schober y Manuel M<sup>a</sup> Alegre, por la contribucion que les impuso la Junta creada por el art. 5º del Reglamento que formó el C. Gobernador del Estado, para el cobro de la contribucion extraordinaria de \$ 15,000 que por una sola vez impuso el decreto núm. 40 de 22 de Junio próximo pasado. Visto el informe de la autoridad responsable; lo pedido por el C. Promotor; la sentencia del Juez de Distrito que amparó á los quejosos, y

Considerando: Que es atribucion expresa

del Congreso de la Union, aumentar ó disminuir las dotaciones de los empleados de la federacion, y que al hacer extensivas las contribuciones de los Estados á estos, se invaden las atribuciones de la federacion; con fundamento de los arts. 72, 101 y 102 constitucionales, y de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

Que es de confirmarse y se confirma, la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Sonora, en 6 de Agosto próximo pasado, en la parte que dice: "la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. Francisco Sepúlveda, Félix Schiafino, Francisco Schober y Manuel M<sup>a</sup> Alegre, contra el cobro que les hace el C. Administrador de Rentas de este Puerto, de \$ 60 al primero; 35 al segundo; 18 al tercero y 40 al cuarto, por contribucion extraordinaria decretada por el H. Congreso de este Estado é indebidamente aplicada por la Junta revisora, por violarse con tal cobro, en la persona de los quejosos, la garantía que les concede el art. 16 de la Constitucion general."

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 20 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México, por Andrés Castañeda, contra el C. Jefe político de Xochimilco, que lo juzgó como á reo de plagio y lo condenó á la pena capital.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 2º de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Que Andrés Castañeda, preso en la carcel de Botlen de esta Capital, fué juzgado y sentenciado á la pena capital por el C. Prefecto de Xochimilco en 23 de Abril de 1873. con fundamento de la ley de 18 de Mayo de 1871, y art. 2º de la ley de 23 del mismo mes de 1872.

En 21 de Noviembre de 1873, se sirvió el Supremo Gobierno indultar á Castañeda, de la pena capital, conmutándosela en la de diez años de prision.

A pedimento del interesado y por resolucion de dicho Supremo Gobierno, fecha 16 de Enero del presente año, se le dió copia simple de la causa.

Ocorre ahora á este Juzgado 2º de Distrito, interponiendo recurso de amparo contra la sentencia de la Autoridad política de Xochimilco y contra la conmutacion de la pena, por que habiéndose violado en ese juicio las garantías individuales que la Constitucion otorga en sus arts. 13, 14, 19, 21 y 23, cuyas fracciones designa, no tienen dichas sentencias valor legal, ni pueden por lo mismo surtir sus efectos.

Por vía de informe con justificacion que se pidió al Prefecto del Distrito de Xochimilco, remitió la causa original que instruyó á Castañeda, por los delitos de plagio y robo.

Se ha impuesto el Promotor que suscribe, de la causa referida, no para revisarla, ni examinar los méritos que de las diligencias practicadas en ella resulten ó no, legalmente comprobados los hechos de que se hizo cargo á Andrés Castañeda, sino para